

## Ministerios de la verdad

RAYMUNDO RIVA PALACIO

En los días previos a las elecciones del 18 de agosto, los lectores de periódicos pudieron apreciar en las primeras páginas de cada diario los resultados de una encuesta sobre las preferencias de los guanajuatenses respecto a quién quisieran que los gobernara durante seis años. Los resultados favorecían al priísta Ramón Aguirre.

Por los mismos días, los periódicos publicaron, también en sus primeras planas, los últimos informes de los gobernadores de ese estado, Rafael Corrales Ayala, y de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer. Igualmente comenzaron a aparecer en páginas interiores los avances, promesas y gestiones ya realizadas de distintos candidatos priístas a diversos puestos de elección popular.

La impresión para un lector no educado en esas culturas debió haber sido que los candidatos priístas estaban haciendo intensas, extensas y benéficas campañas de proselitismo. Lo que ese lector desconoce es que lejos de ser esas noticias un reflejo de actividad política, son el espejo de uno de los vicios más repugnantes que ocurren en las relaciones prensa-gobierno: la propaganda disfrazada de información.

1. El 30 de julio el periódico *AJA*, de León publicó una encuesta donde revelaba que el 40 por ciento de los guanajuatenses pensaba votar por Ramón Aguirre en las elecciones para la gubernativa de ese estado; el 22 por ciento decía apoyar al panista Vicente Fox y el cinco por ciento se inclinaba por el perredista Porfirio Muñoz Ledo.

Hasta ese momento, la encuesta del principal diario leonés no dejaba de ser un sondeo preliminar elaborado con fines periodísticos. El PRI, sin embargo, se encargó de prostituir el trabajo del *AJA*, de León y convirtió una información en instrumento de su propia propaganda política. El mismo día que apareció publicada la encuesta, el PRI nacional envió el muestreo a un buen número de diarios de la ciudad de México para que se publicara como inserción pagada; es decir, que entrara como si fuera anuncio.

De esa manera apareció reproducida la encuesta en las primeras planas de cuando menos *El Día*, *El Herald* de México, *El Nacional*, *El Sol* de México, *el Universal*, *Excelsior*, *La Afición*, *La Jornada*, *Novedades* y *Ovaciones*. El costo aproximado de las inserciones para el PRI fue de 40 millones de pesos en cada periódico -o sea, 400 millones de pesos-. Ninguno de los diarios señaló que esa información había sido pagada por el PRI.

2. El domingo 4 de agosto en las primeras planas de *El Día*, *El Herald* de México, *El Sol* de México, *Excelsior*, *La Jornada*, *Novedades* y *unomásuno*, apareció una declaración de Ramón Aguirre en Salamanca, donde expresaba su convicción de que ganaría limpiamente a sus opositores y que preservaría las libertades durante su gobierno. El costo aproximado de esa inserción política fue de también alrededor de 40 millones de pesos, y como en los casos anteriores, ningún periódico informó que era propaganda pagada.

3. El 26 de julio se suscitó en Chilpancingo un violento incidente en el Congreso local. La comparecencia del alcalde de Petatlán provocó que se encendieran las pasiones y se pusiera en movimiento, una vez más, la maquinaria propagandista gubernamental.

El *Universal* tituló al día siguiente: «Golpean y expulsan del Congreso de Guerrero al perredista Félix Salgado», en lo que su corresponsal Juan Cervera narra cómo «policías antimotines y de civil golpearon y expulsaron del recinto del Congreso local al diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a petición del presidente del órgano legislativo, Jaime Pineda Salgado».

La *Jornada*, que el mismo 27 encabezó «Fuerza policial contra perredistas en el Congreso de Guerrero», publicó la información de su corresponsal José Manuel Benítez, quién describió:

*Gritos agresivos de priístas instalados en el salón de sesiones, y el desalojo a golpes de perredistas por policías antimotines, enmarcaron la comparecencia del alcalde de Petatlán, Francisco Chavarría Valdeolivar, ante el Congreso local para responder de los cargos que se le imputan por presunto desvío de fondos, obras y uso de maquinaria en beneficio personal.*

Cualquier lector pudo haberse quedado con la impresión de que los perredistas fueron agredidos por los cuerpos de seguridad del gobierno de Guerrero. Dos periódicos de distinta orientación, posición y público, coincidieron en ello aunque la versión oficial era totalmente distinta. El mismo día que apareció la información de Benítez, *La Jornada* publicó un boletín, pagado como inserción por los poderes de Guerrero, que empezaba:

*Sin ninguna prueba documental o testimonial que demostrara su inocencia ante las acusaciones que le imputan sus mismos compañeros regidores perredistas -malversación de fondos, violación a la Constitución Política del estado, a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley de Justicia Administrativa, así como amenazas, entre otras-, el presidente municipal de Petatlán —suspendido temporalmente—, Francisco Chavarría Valdeolivar, compareció hoy ante las Comisiones Instructoras de Hacienda y Cuenta Pública y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local.*

La información de los poderes de Guerrero dedicó los primeros ocho párrafos de un total de once para hablar sobre el alcalde de Petatlán, y hasta el antepenúltimo se refirió al incidente de Salgado Macedonio, al consignar:

*Cuando se desarrollaba la comparecencia de Chavarría Valdeolivar, el diputado federal por el II Distrito, con cabecera en Iguala, Félix Salgado Macedonio (PRD), interrumpió varias veces la sesión insultando al presidente del Congreso y a los integrantes de las comisiones a efecto de que no se llevara a cabo la sesión. Ante ello, el presidente del Congreso pidió en tres ocasiones moción de orden para continuar con la comparecencia del alcalde suspendido.*

En cuarta interrupción, el diputado Félix Salgado Macedonio retó al presidente del Congreso, Jaime Pineda Salgado, a que intentara sacarlo.

El presidente del Congreso se fundamentó en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que los asistentes a las sesiones del Congreso local deben guardar compostura y silencio y no pueden participar en la sesión y, en caso de no cumplir estas disposiciones, está facultado el Congreso para efectuar el desalojo de quienes no las cumplen, por lo que, con el acuerdo favorable de todos los diputados integrantes de las comisiones, el diputado Félix Salgado Macedonio fue conminado a salir del recinto legislativo y armó un sainete al retirarse.

En el boletín pagado por los poderes de Guerrero no existió jamás la agresión policial que refirieron los corresponsales de El Universal y La Jornada. Por el contrario, la versión oficial es sustancialmente opuesta a la que se reportó desde un ángulo periodístico y la culpa recae enteramente en el diputado perredista.

El esquema practicado por el gobierno de Guerrero y el PRI en estos casos no es novedoso. Tampoco es original de la administración de Carlos Salinas, aunque hay que señalar que durante su gestión se ha incrementado el uso de la propaganda disfrazada de información.

La propaganda en el terreno de la comunicación social, escribió el investigador español Alejandro Pizarroso Quintero, consiste en un proceso de diseminación de ideas a través de múltiples canales, con la finalidad de promover en el grupo al que se dirige los objetivos del emisor, no necesariamente favorables al receptor. Implica, pues, un proceso de información y un proceso de disuasión.

Los comunicadores salmistas han ejercido la práctica como pocos, en sus posiciones, lo habían hecho. Por ejemplo, promovieron un libro de fotografías de campesinos perredistas con mosquetones al hombro -imágenes altamente evocativas de la Revolución Mexicana- y mediante la repetición de símbolos similares provocaron que una buena parte de la población identificara al PRD con la violencia.

Tras las agitadas elecciones locales en Guerrero, cuyo caso se trasladó a la Cámara de Diputados, el PRI tuvo que pagar las intervenciones de los legisladores de su partido para que pudieran aparecer en las primeras planas de los diarios y contrarrestar las denuncias y las críticas de la oposición al proceso electoral.

Prácticamente todos los informes de gobernadores -con la excepción de Ernesto Ruffo Appel- gastan entre 40 y 90 millones de pesos para inserciones pagadas en los principales diarios de la ciudad de México y así disponer de un espacio preferencial a su discurso. Ruíz Massieu y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se cuentan entre los principales mandatarios estatales que pagan sistemáticamente espacios en los periódicos para que la sociedad y la clase política en el Distrito Federal se entere de sus acciones de gobierno.

La propaganda política disfrazada de información ha desplazado a la información real. Los comunicadores han preferido garantizar la publicación de discursos y acciones de sus obras, críticas o denuncias de sus opositores, por encima de dejar que por su propio peso las ideas ganen sus espacios en los medios.

El temor a que ideas huecas o su falta de credibilidad les impidan competir por espacios periodísticos ha llevado a situaciones lamentables y lastimosas dentro del sistema político mexicano. ¿A quién le importa realmente en la ciudad de México que «a más de 13 mil tamaulipecos benefició la jornada oftalmológica»? Sin embargo, el 29 de julio las autoridades de esa entidad pagaron media plana de propaganda disfrazada de información en algunos periódicos capitalinos. ¿O por qué el candidato a senador por Chihuahua, Artemio Iglesias, tiene que pagar gacetillas en los diarios del Distrito Federal sobre una campaña a centenares de kilómetros de distancia? ¿Por qué la obsesión de mostrar en la capital que están trabajando? ¿Por qué la simulación?

Una buena parte de los comunicadores gubernamentales concibe su trabajo y la comunicación social en términos de gacetillas y fotografías pagadas en los diarios incapaces de comunicar e inhabilitados para informar con veracidad y profesionalismo. La cultura que arroja al diseño de la comunicación social no es el de puentear entre gobernantes y gobernados para transmitir mensajes y lograr que se entiendan, sino el de difundir su verdad y su realidad sin importarles que por ocultar o manipular hechos y acontecimientos no necesariamente sobrevivan las pruebas de credibilidad.

En el abuso de la propaganda política en la comunicación social se encuentra mucho del agotamiento del discurso oficial. En los excesos en que han caído los comunicadores del poder se encuentra una parte importante de la falta de credibilidad en el gobierno y sus instituciones. Un lugar común sería el sugerir que aún es tiempo para cambiar, pero eso no se ve en el horizonte próximo. ¿Se podrá algún día revolucionar la comunicación social? Al paso que se marcha, difícilmente.